

# LA CRISIS VENIDERA EN CHILE

*Mark Falcoff*

***E**l proceso político de la historia reciente de Chile que se inicia a partir de la llegada de Salvador Allende al poder y su posterior derrocamiento por los militares, encabezados por el General Augusto Pinochet Ugarte, es el tema central del presente estudio. El ensayista norteamericano enjuicia críticamente tanto al fracasado gobierno de Allende como a la ya prolongada dictadura personalista de Pinochet, a la vez que sugiere cuál debe ser la política norteamericana frente al país austral en este momento.*

• • •

EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE se cumplieron doce años del golpe de estado de Chile que derribó al Presidente *Salvador Allende*, extinguió el sistema democrático en ese país y estableció en su lugar una dictadura porfiada, arrogante y a veces sorprendentemente cruel. Al actuar como lo hicieron en ese momento, los generales argumentaban haber salvado a su país del comunismo y de la guerra civil. Sin embargo, en los doce años transcurridos desde entonces, ha surgido un nuevo régimen que lejos de consolidar ese logro — en realidad aumenta cada vez más la posibilidad de que en un momento futuro las fuerzas del marxismo-leninismo en Chile alcancen efectivamente sus objetivos.

Chile es una pequeña y remota nación suramericana. Carece de la población, el incentivo para la inversión o el significado geopolítico que hacen de Brasil y Argentina países importantes para Estados Unidos. Pero Chile siempre ha sido un campo de batalla entre ideologías y acontecimientos que han adquirido a menudo una importancia simbólica grande. Esto es especialmente cierto con relación al golpe de 1973: pocos incidentes de la historia latinoamericana han tenido una repercusión de tanto alcance internacional. Las frecuentes referencias a Chile en el reciente debate del Congreso sobre Nicaragua son prueba de que los recuerdos del golpe continúan afectando el curso de las políticas domésticas americanas, así como de la política internacional.

Existen por lo menos cuatro razones por las cuales Chile sigue siendo un foco de controversia en Estados Unidos y en cualquier otro lugar. Primero, hasta 1973 tuvo el sistema democrático más estable de los existentes en América Latina, con una cultura política similar por lo menos en apariencia

II TRIMESTRE 1986

a la de Italia o a la de la Francia de la 4a República. Por eso la destrucción de su democracia ha parecido especialmente trágica.

Segundo, *Allende* mismo era un marxista —amigo y admirador de *Fidel Castro*— que quería a toda costa transformar las instituciones políticas y económicas de manera irrevocable e irreversible a través de métodos pacíficos y parlamentarios (“a la manera chilena”). Para más seguridad, era una coalición inestable y aún incoherente de socialistas, comunistas y partidos pequeñísimos de la izquierda liberal que nunca obtuvieron una mayoría para funcionar ni en el Congreso, ni en el país en general. Pero sin ponerle mucha atención a ese detalle, era posible ver al régimen de *Allende* como la primera oportunidad de sellar el “compromiso histórico” entre el marxismo y la democracia, sugerido alguna vez como posible por *Engels*. Fue esto en particular lo que atrajo la atención de los europeos occidentales hacia el experimento chileno.

Tercero, como desde entonces se ha probado que la administración *Nixon* auspició un golpe (que resultó un fracaso) para impedir que *Allende* llegara al gobierno después de su elección en 1970, y más tarde entregó cerca de \$8 millones de dólares durante los 3 años siguientes, para ayudar a los partidos y fuerzas de la oposición chilena, los críticos sostienen que Estados Unidos carga con la responsabilidad moral de la extinción de la democracia en Chile, y aún de la existencia del actual gobierno militar. Estas opiniones subsisten a pesar de que un comité especial del senado norteamericano constituido para investigar el asunto, no encontró una vinculación directa de Estados Unidos en el golpe mismo.

Finalmente, el tratamiento inhumano dado a algunos de los partidarios de *Allende* después del golpe, que ha continuado desde entonces a escala pequeña pero de manera persistente en contra de los disidentes de todas las tendencias políticas, ha revivido, dentro de los círculos liberales de Estados Unidos y Europa Occidental, la idea de que es el fascismo —y no el comunismo— la principal amenaza de la humanidad, y que la resistencia exitosa a los regímenes marxistas en cualquier otro lugar, está condenada a producir un inaceptable costo humano igual o similar.

A pesar de que se han producido docenas de libros, panfletos, películas, representaciones y aún pinturas desde 1973 para explicar las causas de la caída de *Allende*, el asunto mismo puede reducirse en realidad a unos pocos párrafos. *Allende* fue elegido en 1970 con algo más de la tercera parte de los votos, con menos de 2 puntos porcentuales más que el candidato de la derecha, *Jorge Alessandri*. Aunque el grupo centrista, demócrata-cristiano —el mayor grupo individual de Chile— inicialmente se ofreció a colaborar con el nuevo gobierno, *Allende* despreció esta oferta (que hubiera requerido necesariamente una moderación de su programa) y en cambio decidió gobernar como si acabara de recibir un mandato decisivo.

Ya para el comienzo del segundo de los seis años de su periodo, su gobierno estaba en problemas serios. Un manejo económico equivocado y una manipulación no realista de los precios ocasionaron una escasez de productos básicos principales y una gran inflación; mientras tanto, las confiscaciones “espontáneas” de algunas propiedades, tanto rurales como urbanas,

por cuenta de algunos de los partidarios del propio presidente (sobre los cuales ejercía un control limitado), socavaron el respeto al mandato de la ley. Durante 1972 y 1973 el país fue sacudido por protestas y huelgas conducidas por transportadores, a los cuales se unieron eventualmente los tenderos, pequeños comerciantes, profesionales y al final, aún los mineros del cobre.

En una situación de creciente polarización, *Allende* creyó necesario hacer un llamado al ejército chileno para que actuara como una fuerza neutral entre su gobierno y la cada vez mayor oposición unificada, que ahora no sólo incluía a la derecha, sino también a los demócrata-cristianos, y a otras fuerzas de centro. Los jefes de servicio urgieron repetidamente a *Allende* para que hiciera un compromiso con los demócrata-cristianos, pero en definitiva su propio partido socialista le prohibió hacerlo. Eventualmente los militares se cansaron de actuar de amortiguadores entre los que habían dividido el país en dos, y se tomaron el poder. Pensar que estos sucesos fueron (o pudieron haber sido) de alguna forma propiciados por Estados Unidos —en forma encubierta o no— es menospreciar mucho la complejidad y los conflictos de la política chilena.

### *El Ascenso de Pinochet*

DEBIDO A QUE LOS LIBERALES, considerados izquierdistas, y los marxistas de todo tipo se habían apoderado de Chile y lo exhibían como un tesoro en contra de la arremetida anticomunista de la política exterior americana, los conservadores han estado reticentes para unirse al coro de la oposición al régimen militar. En Chile, los conservadores utilizan un discurso de tono ligeramente defensivo: generalmente utilizan la afirmación ritual de que los regímenes autoritarios militares están condenados con el tiempo a evolucionar hacia la democracia. Entre tanto, según este argumento, es mejor no desestabilizarlos mientras se dirigen hacia su (aparentemente inevitable) ciclo de auto-liquidación.

No cabe duda de que, en términos generales, esta es una buena medida, como lo prueban las transiciones exitosas (a veces después de décadas de regímenes autoritarios) que desde 1974 se han efectuado en Grecia, Portugal, España, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil. Sin embargo, aunque los regímenes autoritarios puedan realmente con el tiempo llevar a la restauración de las instituciones pluralistas, este no ha sido siempre el resultado. Y cuando no lo es —como en la Cuba de *Batista* o la Nicaragua de Somoza— las consecuencias para el pueblo de ese país y para los intereses de seguridad de Estados Unidos, son catastróficas. Desafortunadamente, como están las cosas ahora, la comparación más apropiada para Chile no es con España o Brasil, sino con Cuba o Nicaragua, y es necesario que los americanos, en especial los conservadores, así lo entiendan.

Cuando las Fuerzas Armadas depusieron a *Salvador Allende*, la mayoría de los chilenos esperaba que la nueva junta militar gobernara por un periodo relativamente breve. Pero en la realidad, esta ha durado más que cualquier otro gobierno de la historia de la nación, y a diferencia de aquellos que recientemente han expirado en otros países de Suramérica, este se ha

venido identificando con una sola personalidad superpoderosa, el General *Augusto Pinochet Ugarte*. Nacido en 1915 en una familia de clase media, entró en la Academia Militar siendo adolescente y fue ascendido a teniente segundo en 1933. Durante los 40 años siguientes su ascenso fue lento en un ejército que no participaba en guerras en el exterior ni hacía pronunciamientos en casa. Los puntos más altos de esa carrera fueron un periodo como agregado militar en Ecuador; su enseñanza en escuelas de servicio, donde cultivó un interés por la historia militar y la geopolítica; y un periodo como comandante de zona en el árido norte de Chile, fuente de su riqueza mineral y epicentro de su sindicalismo militante.

En su autobiografía, *El Día Decisivo*, publicada en 1980, *Pinochet* describe sus años previos a la presidencia como un tiempo de maduración política y toma de conciencia creciente. Pero hasta el mismo día del golpe de *Allende*, esto no se vio. En efecto, *Pinochet* llegó al pináculo de su carrera —Comandante en Jefe del Ejército Chileno— en agosto de 1973, en buena medida porque no había sido identificado ni siquiera en los círculos militares extremadamente confidenciales, con la oposición a *Allende*. Se unió al movimiento para deponer a éste sólo en el último minuto.

Desde 1973 *Pinochet* ha estrechado su control personal sobre las Fuerzas Armadas. Obligó a retirarse a los viejos oficiales, que podían ser considerados como rivales potenciales. Y depuso a un miembro de la Junta —el general *Gustavo Leigh* de la Fuerza Aérea— partidario de un retorno más rápido a la democracia. Un plebiscito convocado en 1980 aprobó una nueva constitución que lo hizo presidente por un periodo continuo hasta 1989. En teoría, la junta militar de cuatro miembros detenta poderes cuasi-legislativos, y existen algunas diferencias de opinión entre ésta y *Pinochet*. Sin embargo, sus opiniones han prevalecido invariablemente, y mantiene una fuerte presencia en ese cuerpo por medio del representante de la Armada que lo reemplazó a él. El tipo de decisión colectiva y de “parlamentarismo” militar que operó en Argentina y Brasil en los años 70, no ha aparecido aquí y nadie espera que aparezca durante el tiempo que *Pinochet* permanezca en escena.

“Chile avanza en paz y orden”. Tal es el slogan del régimen: No sólo es propaganda oficial sino también una justa descripción de la situación actual. En muchos aspectos el gobierno está más fuerte que nunca. Ejerce un control total sobre las Fuerzas Armadas y la policía y posee la capacidad para establecer límites estrictos a la independencia judicial o a la libertad académica. Más aún, a partir del colapso de la banca privada chilena en 1982, el gobierno ha asumido sus obligaciones y al hacerlo ha adquirido un control de hecho sobre la industria chilena, aspiración nunca lograda de *Allende*. La diferencia está en que el “socialismo” de *Pinochet* es completamente informal, y reversible, por lo menos en teoría — en el caso improbable de que los deudores encontraran la manera de cancelar sus préstamos. Entretanto, los generales activos y en retiro tienen asiento en las juntas administrativas de las mayores instituciones de crédito, y por ello están en capacidad de influir sobre el comportamiento de las empresas chilenas claves, incluyendo los periódicos y otros medios de comunicación masiva. Así, la idea —difundida entre los círculos conservadores de Estados Unidos— de

que Chile de alguna forma se ha convertido en una vitrina para la libre empresa, resulta un tanto desmedida.

Frente a este incremento de poder del régimen, hay que considerar una pérdida irreparable: la mística que le dio al gobierno militar un apoyo basado en el consenso popular, entre 1973 y 1980. Durante esos años se consideró que aquel había salvado a Chile del abismo al que lo habían conducido *Allende* y sus partidarios, y las dificultades económicas de mediados de los 70 podían considerarse como el precio —costoso pero inevitable— de haber escapado a lo peor. Más aún, entre 1978 y 1981 Chile experimentó una recuperación económica breve pero notoria, determinada por los altos costos del cobre, su principal producto de exportación y por la inundación de nuevos préstamos extranjeros. Desde 1982 el precio del cobre ha descendido a niveles muy bajos, provocando la devaluación del peso chileno y llevando a la bancarrota a muchas empresas —e individuos— que habían contraído deudas en dólares. El desempleo también se ha elevado por lo menos a un 25%, y corresponde en gran parte, a gente joven recién ingresada al mercado laboral. Es normal que los gobiernos de facto latinoamericanos experimenten una pérdida de legitimidad o desgaste con el tiempo; en realidad es sólo bajo estas circunstancias que generalmente deciden iniciar el retorno hacia un gobierno civil. En este caso, sin embargo, la naturaleza del régimen ha hecho que este regreso sea virtualmente imposible.

En efecto, la nación se hundió, primero en la crisis económica y luego en la explosión social. A comienzos de mayo de 1983, Chile fue sacudido por una nueva serie de huelgas, repetidas durante todo el mes y hasta mediados de verano, cuando *Pinochet* se vio obligado a llamar con urgencia a 18.000 nuevos efectivos del ejército para ayudar a la policía paramilitar, los *carabineros*. En agosto, probablemente bajo la presión de los jefes de servicio y de los altos funcionarios colocó a *Sergio Onofre Jarpa*, un político conservador destacado en la lucha contra *Allende*, en el puesto de Ministro del Interior.

Inmediatamente *Jarpa* levantó la censura de prensa, permitió el retorno de algunos exiliados importantes e inició un diálogo con la oposición, en el cual se contemplaba entre otras cosas, un adelanto de la fecha de las elecciones.

En tres ocasiones durante los meses de agosto y septiembre, *Jarpa* se reunió con los líderes de todos los partidos de la oposición, con excepción de los comunistas, pero sin ningún resultado, pues los partidos de la oposición se negaron a aceptar la constitución de 1980 de *Pinochet* como base para la discusión y en cambio pedían que éste dejara la presidencia de inmediato. Una vez que la oposición se dio cuenta de que *Jarpa* no estaba en disposición de ofrecer esto, sus miembros resolvieron retirarse de la negociación y esperar futuras manifestaciones, confiando en que éstas intimidaran a los militares y los obligaran a entregarle el poder. Se presentaron en efecto brotes de descontento más adelante, algunos espontáneos, algunos provocados por los comunistas, (cuyos propósitos eran completamente diferentes, ya que fueron excluidos del diálogo y por eso no podían esperar ningún beneficio de su resultado exitoso). El 6 de noviembre de 1984 *Pinochet* impuso el esta-

do de sitio y reemplazó a *Jarpa* con un personaje menos independiente. La estricta censura de prensa y el toque de queda nocturno fueron reimplantados también. Aunque el estado de sitio fue levantado seis meses después debido a la fuerte presión de Estados Unidos, muchos de los poderes extraordinarios que este confería al presidente, fueron simplemente transferidos al “estado de emergencia” que lo reemplazó. El gobierno retiró su oferta inicial de considerar un adelanto en la fecha de las elecciones del congreso, y ahora insiste en que la fecha dada inicialmente debe ser respetada. De ahí que desde la perspectiva de ambos, gobierno y oposición, no existe ninguna base para reasumir el diálogo.

### *Inflexibilidad Constitucional*

PARA EXPLICAR ESTA SITUACION, necesitamos examinar brevemente la constitución de 1980, que muestra hasta dónde está tratando *Pinochet* de llevar al país, y explica también por qué la oposición la encuentra inaceptable, al menos bajo su forma actual. Diseñada por un comité de juristas designado por la junta, esta Carta debe supuestamente servir de base para una transición hacia la democracia en 1989.

Básicamente se contempla un procedimiento de tres fases: En la primera, de 1980 a 1989, todos los partidos políticos permanecerán “en receso”, es decir, serán ilegales, y el presidente será el General *Augusto Pinochet Ugarte* (él es mencionado en el documento). En la segunda etapa, que comenzará en 1989, los comandantes de las tres fuerzas armadas y el de la Policía Nacional designarán a alguien para que ejerza la presidencia durante un periodo de ocho años, previo un plebiscito. Esta persona estará excepcionalmente exenta de la medida que en lo sucesivo prohíbe la reelección. Ante la eventualidad de un resultado negativo en el plebiscito, el presente gobierno se prolongará por un año adicional, al cabo del cual se efectuará una elección normal y competitiva, coincidente con la prevista elección para el Congreso. Sin embargo, a la oposición sólo se le darán dos meses para la organización de su campaña electoral.

En la tercera fase un Congreso —conformado por Senado y Cámara de diputados— comenzará a funcionar a partir de 1990. Sin embargo, el senado sólo será elegido parcialmente por voto popular y algunas cláusulas inteligentemente colocadas le darán al ejecutivo la oportunidad de “manejarlo”, y así vetar desde el interior todas sus decisiones. Más aún, prácticamente ningún asunto importante es dejado a la iniciativa del parlamento. Igualmente despoja a la cámara de diputados —el único cuerpo totalmente representativo— de sus privilegios históricos, tales como la postestad de revisar las Actas Ejecutivas cuasi — legislativas. La constitución elimina virtualmente el requisito de obtener la aprobación del parlamento para los decretos restrictivos de las garantías constitucionales.

Pero lo que seguramente constituye una de las cláusulas más insólitas, nunca vista en una constitución occidental, es la posibilidad de que una nueva corte constitucional, nombrada por los militares, pueda expulsar a un diputado o senador por proponer o aún votar por una moción o un proyecto que sea luego declarado “inconstitucional”.

La constitución, en la práctica, no puede ser modificada sin el consentimiento del presidente. No puede ser enmendada de forma que reduzca las más importantes prerrogativas del ejecutivo o que aumente los poderes del congreso. Tampoco puede ser cambiada de ninguna forma para disminuir el poder del tribunal constitucional, las fuerzas armadas o la Policía Nacional, sin la aprobación del presidente. En otros asuntos de menor importancia, el parlamento prevalecerá sobre el presidente si logra obtener una mayoría de las tres cuartas partes; aún así, el ejecutivo podrá todavía convocar a un plebiscito con el fin de echar para atrás una decisión así tomada.

Tal vez el aspecto más importante de la constitución es la forma como introduce un papel tutelar nuevo y permanente de las fuerzas armadas, cuyos jefes pueden oponerse a cualquier ley, partido o medida política que “comprometen la seguridad nacional” o “amenacen gravemente los funcionamiento del orden institucional”. En realidad, la carta socava la misma noción del control civil del proceso político, mediante la creación de un poder militar semi-autónomo en el sistema político. Los jefes de servicio podrán proponer sus propias leyes, no sujetas a retiro por parte del presidente. Chile tendrá, bien una democracia extremadamente limitada, o bien, si los militares prefieren no ejercer sus atribuciones, la tiranía de un individuo, solo y todopoderoso.

La constitución solo podrá marchar mientras no haya una diferencia substancial entre los puntos de vista del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados. Esa unanimidad es poco probable porque la constitución prevé un eventual retorno a la actividad política democrática-partidos, elecciones, garantías individuales, etc. Pero como prácticamente no hay forma de enmendar la constitución, los chilenos quedan privados de la flexibilidad necesaria para expresar sus diferencias.

Casi todos los chilenos esperan que el candidato de la junta en 1989 sea *Pinochet*. La constitución propicia efectivamente este tipo de transición, pero solo le permite al General *Pinochet* permanecer en el poder hasta 1997, y si él vive lo suficiente, hasta el 2005. De alguna forma, se supone que durante este tiempo los chilenos madurarán suficientemente para comportarse políticamente en forma responsable, aunque virtualmente no tendrán ninguna oportunidad de participar en asuntos que impliquen un sentido serio de responsabilidad pública. En 1997 los chilenos menores de 30 años no recordarán ninguna otra forma de sistema político; habrán sido testigos de la humillación de las dóciles fuerzas democráticas, ansiosas de participar en el juego de *Pinochet*; y sabrán sobre el comunismo solo lo que el gobierno ha repetido insistentemente sobre él, lo que no es más que su antítesis.

### *Desdeño por la política*

EL PROBLEMA CENTRAL ES QUE EN TERMINOS actuariales, es muy poco probable que el presidente *Pinochet* viva hasta el año 2005. El mismo no parece preocuparse mucho por este hecho y su decadente grupo de partidarios civiles solo puede aferrarse a la esperanza de que, de alguna forma, otro general surgirá y desempeñará el mismo papel. Dado el carácter altamente personalizado del régimen, esto es poco probable. Cuando *Pinochet* muera, le legará a su país un sistema político que —aunque fuera tomado en serio y obser-

vado rigurosamente por todos sus participantes— estará lejos de la democracia y no tendrá la capacidad de adaptarse a las cambiantes fuerzas políticas de Chile. Es este vacío de legitimidad, actual y portencial, el que ofrece las mayores oportunidades al terrorismo y a la izquierda revolucionaria.

Aunque la constitución de 1980 fue diseñada por una comisión de abogados y teóricos políticos, esta es menos el producto de una deliberación colectiva, que una manifestación barroca de la filosofía política personal de *Pinochet*. El presidente chileno ha descrito frecuentemente el experimento de *Allende* como la culminación de un largo proceso, en el cual la democracia se demostró incapaz de resistir la doctrina totalitaria, y le entregó realmente al comunismo “las mejores armas para destruirse”.

A este respecto, en forma extraña, *Pinochet* aceptó, por lo menos implícitamente, el mito del marxismo chileno —es decir, — que el pueblo solo espera la oportunidad para lanzarse hacia el comunismo. Esto es lo que él quiere expresar cuando habla de la necesidad de establecer una “democracia protegida” con “pluralismo limitado”. Con seguridad sus suposiciones son contradichas por buena parte de la historia reciente de Chile, incluyendo la incapacidad de *Allende* para obtener un mandato electoral para el socialismo, la extensa y activa oposición civil a sus programas y la decisión del Congreso en agosto de 1973 de declarar su gobierno “fuera de ley”. Pero las ideas de *Pinochet* enmascaran su propósito escondido de “salvar” a los chilenos, no solo del comunismo o aún del socialismo, sino de la política, en el sentido corriente del término.

*El Día Decisivo* está lleno de falsas referencias al viejo orden de Chile cuyos políticos son descritos como irremediabilmente corruptos, egoístas, incultos, y cuyos partidos enteros y gobiernos son considerados “infiltrados” por el marxismo. Así, no es sorprendente que los partidos no tengan hoy existencia legal en Chile, a pesar de que según las aspiraciones de *Pinochet*, se supone que ellos deben irrumpir repentinamente dentro de cinco años para cumplir con su tarea de elegir un Congreso y actuar como una oposición extremadamente mansa. Mientras tanto, sin embargo, su organización y el conjunto de sus miembros deberá adelantar un trabajo pacífico, sujetos constantemente a la detención, al tratamiento brutal y al exilio interno. Otra vez, paradójicamente, esto redundará en beneficio del partido que demuestre capacidad de operar en secreto, es decir, los comunistas, quienes reciben ayuda amplia de fuentes soviéticas y cubanas, y desde 1980 han aprobado el terrorismo como el método apropiado para resistir al gobierno.

Los comunistas han planeado y efectuado ataques a estaciones de policía e instalaciones militares, han colocado bombas y han efectuado otros actos de sabotaje. Otras dos organizaciones terroristas, el Movimiento de la Revolución (MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) afirman ser independientes del partido, pero hay evidencias considerables de que por lo menos el último opera bajo su guía. En 1983 los comunistas, al MIR y la pequeña fracción del Partido Socialista, que continúa defendiendo el camino violento hacia el poder, crearon un amplio frente conocido como el Movimiento Democrático del Pueblo (MDP).

La evolución reciente del Partido Comunista chileno muestra un marcado contraste con el papel que desempeñó durante el régimen de *Allende*, ac-

tuando como fuerza política de contención de las presiones y actividades ultrazquierdistas del MIR y del ala izquierda del Partido Socialista del propio presidente. Entretanto los socialistas se han reagrupado —tanto los del exilio como los que están en el país— y la fracción más grande, conducida por el ex ministro del interior Carlos Briones, es el producto de un proceso largo de auto-crítica, propiciado en cierta medida por el advenimiento de un gobierno socialista estable en España, un país cuya experiencia en muchos aspectos es similar a la de Chile. En este momento acoge formalmente la democracia y repudia específicamente el leninismo, el terrorismo y la vía violenta hacia el poder. Para la muestra, ha roto una alianza de más de 25 años con el comunismo en Chile.

#### *Dos clases de oposición:*

HISTORICAMENTE, CHILE HA TENIDO tres grandes comunidades políticas, más o menos iguales en tamaño y fuerza: una de izquierda, una de derecha y una de centro.

Durante muchos años la izquierda no pudo ganar una elección nacional porque cuando enfrentaba la eventualidad de una coalición socialista-comunista victoriosa, el centro y la derecha siempre se unían detrás de un solo candidato. La única excepción fue en 1970, lo que explica por qué *Allende* logró triunfar por unos pocos miles de votos, y sin embargo fue incapaz de conducir su país por el camino del socialismo sin violentar sus instituciones democráticas.

Es necesario tener en cuenta este antecedente para entender la complejidad de la situación actual: por primera vez el centro, la izquierda y aún elementos de la derecha se han unido en un asunto crucial: la oposición a *Pinochet*. En efecto, de todos los partidos que hoy conforman el espectro de la oposición, que es la Alianza Democrática, solo *Briones* se opuso realmente al golpe militar que llevó a *Pinochet* al poder. Según los parámetros chilenos, la Alianza podría describirse como ligeramente de derecha o de centro. En cualquier caso, los demócratas-cristianos, los radicales, los socialdemócratas y los liberales no son partidos izquierdistas en el sentido comúnmente aceptado. Por fuera de la alianza hay dos pequeños grupos de derecha que han apoyado al gobierno en el pasado —el Partido Nacional y la Unión Nacional— pero sus líderes hoy critican cada vez más la “institucionalidad de papel” de la constitución de *Pinochet*, y consideran la fórmula de transición del gobierno como “menos una preparación para la vida democrática que para posponer indefinidamente su retorno”.

Como en todas las coaliciones, dentro de la Alianza Democrática hay serias diferencias de opinión, en especial en lo que concierne a las relaciones con el partido Comunista. Algunos aspectos de la historia chilena hacen que esto sean un asunto más complicado de lo que parece a primera vista. Debido a su cultura política amplia y a su civilización, Chile fue considerado por los soviéticos como una vitrina potencial para cierto tipo de “Eurocomunismo”; de ahí que durante años el partido comunista chileno persistiera en una conducta intachable, en buena medida como sus compañeros de Francia o Italia. Verdaderamente, de régimen de *Allende*, fue una fuerza de contención y compromiso hasta el final. Al mismo tiempo, los comunistas conti-

núan con un fuerte apoyo de algunos sectores del movimiento obrero, y en la eventualidad de unas elecciones podrían contar con un 15% de la población.

Dentro de la Alianza Democrática, los socialistas están a favor de mantener relaciones de cooperación con el partido y sus aliados en el MDP, mientras que los otros partidos se oponen a cualquier vínculo con él, dado su patrocinio la violencia. Durante la apertura política de 1983-84 *Jarpa* trató de explotar y ahondar estas divisiones, presionando a la Alianza para que se “definiera” con relación al asunto del comunismo. Esto no lo pudo hacer, no porque los partidos que lo integran no sean anticomunistas (fuera del MDP no hay realmente ninguna simpatía por el comunismo como sistema), sino porque no hay acuerdo entre las fuerzas democráticas sobre el lugar que debe ocupar el partido en una transición futura. Por ejemplo, es muy obvio que las fuerzas armadas chilenas —con *Pinochet* o sin él— no pondrán en consideración su legalización en un futuro inmediato, debido a su posición pública de defensa de la violencia frente a la protesta pacífica, o de defensa de la vía revolucionaria al poder, en lugar de la vía parlamentaria. Los comunistas mismos no han facilitado las cosas al apoyar reservadamente ambas tácticas, lo que justifica su proscripción y al mismo tiempo inhibe a la oposición democrática para que adopte hacia ellos una posición que no sea ambigua.

Una curiosa simetría de necesidades se ha desarrollado entre los comunistas y el régimen de *Pinochet*. Ambos utilizan al otro para explicar su conducta y ninguno de los dos tiene interés en un regreso ordenado a la democracia, en el cual las fuerzas que ellos representan estarían en una minoría evidente. Como señaló recientemente *Andrés Allamand*, líder de la conservadora Unión Nacional, el gobierno está haciéndole el juego a los comunistas. Está impidiendo el debate, la participación y la actividad normal de los partidos, es decir, está “reduciendo las posibilidades políticas de Chile a una disyuntiva falsa y peligrosa”: la perpetuación del régimen militar o el establecimiento de una dictadura marxista-leninista. Mientras las fuerzas políticas moderadas sean relegadas a un papel secundario, agrega, “y mientras ellas no puedan o no sean capaces de organizarse y expresarse por sí mismas, no habrá posibilidades reales de cambiar la situación”.

#### *Opciones políticas de Estados Unidos*

LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS hacia Chile ha provocado un debate largo, abstracto y estéril. La escuela “liberal”, identificada con la administración *Carter* y sus epígonos, defiende una combinación de denuncia pública y sanciones; la alternativa conservadora prefiere, a través de su sucesor, rechazar dichas medidas y, en cambio, presionar más discretamente, adoptando la política del garrote y la zanahoria, a la cual alguien le colocó la no muy apropiada etiqueta de “diplomacia tranquila”. No está claro si dichas políticas han producido resultados, fuera de darle a ambos partidos la oportunidad de inculparse mutuamente —más que al general *Pinochet*— por la situación de Chile.

La oposición chilena claramente prefiere el enfoque de la administración *Carter*, cuyos postulados levantan la moral de sus fuerzas, y como se dice frecuentemente, salvan vidas. En términos del movimiento institucional hacia la democracia, sin embargo, la política de *Carter* fue en el me-

jor de los casos, irrelevante para el proceso chileno. El ascenso de *Pinochet* y su posterior toma del poder supremo coincidieron efectivamente con los años de *Carter*; fue al final de su periodo, en 1980, cuando aquel fue confirmado en su papel cuasi-legítimo de presidente “constitucional”.

Entre 1977 y 1980 los diplomáticos chilenos argumentaron frecuentemente que la política de Estados Unidos era en realidad contraproducente, pues fortalecía la posición del sector más duro dentro del gobierno, haciendo más difícil la situación para el grupo de los moderados, partidarios de una solución más conciliadora para los problemas del país. Aparentemente basándose en sus palabras, la administración *Reagan* levantó en 1981 algunas sanciones económicas menores y votó en contra de la renominación de un investigador especial para Chile en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, no hubo las concesiones correspondientes; por el contrario, el gobierno chileno ha tergiversado intencionadamente, ante su propio pueblo, la posición norteamericana, presentándola como la de un endoso irrestricto y los supuestos moderados han abandonado la escena desde entonces. Hoy resulta evidente que es el general *Pinochet* —no el gabinete de ministros ni los secretarios de estado a su alrededor— quien determina el curso de los asuntos chilenos. El único acontecimiento positivo, la apertura política de 1983-84, fue más una respuesta a presiones locales que externas, a pesar de lo mucho que el Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en Chile puedan haberla apoyado en forma oculta. Desde la imposición del estado de sitio a fines de 1983 ha habido un enfriamiento perceptible de las relaciones y nadie espera hoy que *Reagan* levante el embargo de armas impuesto durante los años de *Carter*, o que inicie nuevamente el entrenamiento de oficiales chilenos en Estados Unidos, ambos asuntos de significativa importancia para las fuerzas armadas, aunque no para el mismo *Pinochet*.

De este modo, Estados Unidos tienen que formular una política clara para el futuro de Chile, diferente a la de lamentarse por las violaciones a los derechos humanos (o castigarlas), o expresar la piadosa esperanza de que el país encontrará de alguna manera el camino de regreso a la democracia, con o sin *Pinochet*. Ciertamente no queremos otra Nicaragua, donde un dictador se mantuvo durante tanto tiempo que agotó y humilló a todas las alternativas políticas, con excepción de la que él más temía (y nosotros también). Los chilenos se ofenden con frecuencia por la comparación, pero esta no es tan disparatada como lo suponen: la mayor diferencia entre los dos casos está en que, dada la tradición constitucional de su país, *Pinochet* se ha visto obligado a erigir un complicado armazón de eufemismos legales para ocultar sus intenciones de permanecer como dictador toda su vida. Nada puede ser más peligroso que la suposición de que es mejor dejar que los acontecimientos se desarrollen “por sí solos”, ya que lo que la constitución respaldada hasta 1989 y aún más allá no es una transición hacia la democracia sino una crisis de legitimidad. Como la situación económica no ha mejorado sustancialmente, también podemos esperar el caos social, que los comunistas y sus aliados estarían en posibilidad de capitalizar.

Sería en verdad necesario aceptar la posibilidad de que *Pinochet* permanezca en el cargo hasta 1989, y se concentre, no en transformar la natu-

raleza de la transición, sino en el proceso de fortalecer la Alianza Democrática para eliminar cualquier tentación de relacionarse, así sea de manera indirecta, con el MDP. Un objetivo político —sugerido ya por algunos de los críticos conservadores del gobierno de Chile— sería la revisión del artículo 44 de la constitución, que la hace virtualmente inmodificable en el momento. Esto permitiría que la oposición aceptara la constitución por lo menos como base de las discusiones y negociaciones. Otra sería la expedición de una ley que legalizara a los partidos políticos (con excepción de los comunistas, quienes probablemente deberán permanecer proscritos durante la primera vuelta), y levantara las restricciones vigentes a la radio, la televisión, la prensa y las universidades. Han circulado efectivamente dentro del gobierno diversas versiones de un estatuto para legalizar los partidos, pero el mismo *Pinochet* se ha resistido a su promulgación. No es difícil entender la razón: mientras no haya una existencia real de los partidos en Chile, la Alianza Democrática será conducida por viejas figuras, cuyas carreras políticas son anteriores a 1973; no tendrá oportunidad de surgir una nueva generación de líderes. La reanimación de la vida de los partidos también proporcionaría la posibilidad real de que el candidato presidencial de la junta perdiera efectivamente el plebiscito de 1989, lo que sería un incentivo espléndido para que *Pinochet* se retirara a la vida privada.

Antes de 1973, Estados Unidos poseía una amplia gama de alternativas en su política exterior. Desde entonces muchas de ellas han sido descartadas. El embargo de armas, que podría ser un nivelador útil en este momento, se implantó en 1978, y nuestra capacidad de acción fue truncada desde entonces, gracias al trabajo de los santurriones congresistas liberales, conducidos por el extinto senador *Frank Church*, quien probablemente nunca imaginó una situación en que se necesitaran para apoyar una causa que ellos mismos aprobaran. Aun la *Fundación Nacional para la Democracia*, establecida por el Congreso en 1982, no puede ayudar directamente a los partidos políticos. Actualmente, la mayoría de los recursos extranjeros que llegan a Chile —tanto de Europa occidental como del bloque soviético— van a parar al sector más izquierdista del espectro político.

La influencia cierta que todavía tenemos en Chile es su deuda externa de \$ 18.500 millones de dólares, una de las mayores per cápita del mundo, y su continua necesidad de financiación por parte de instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Tesoro de Estados Unidos ha ayudado en varias oportunidades a sobrellevar la deuda chilena, y con toda seguridad, su papel contribuyó a convencer al general *Pinochet* de que levantara el estado de sitio en junio de 1985. Durante los próximos meses y años se vencerá el plazo de deudas más grandes, y a cada vencimiento se tendrá la oportunidad de ejercer una presión, discreta pero significativa, sobre el gobierno.

Teniendo en cuenta que la utilización con fines políticos de la refinanciación de la deuda funciona en sentido opuesto con propósitos burocráticos y de otra índole, una decisión concienzuda en tal sentido debe tomarse a los más altos niveles. La administración *Reagan* está particularmente bien dispuesta para intentarlo, porque, a diferencia de la de su predecesor, es verdaderamente respetada por el ejército chileno, que constituye el único grupo de pre-

sión capaz de obligar a *Pinochet* a cambiar de parecer. Aún hay tiempo. Sin embargo, para 1990, Chile habrá perdido casi por completo todo contacto con su vieja cultura política democrática y solo las extremas tendrán alguna vitalidad. Para ese entonces también nosotros podremos tener una administración demócrata en Washington, en cuyo caso —si la historia reciente es un precedente— el surgimiento de un régimen revolucionario marxista provocará una orgía de autoflagelación y el fetichismo de la “no intervención”.

Solo porque *Pinochet* aduzca representar la única alternativa para el comunismo no es razón para que los demás acepten este argumento como válido. Esas dudosas dicotomías sirven para afianzar aún más el régimen de *Pinochet* a corto plazo, pero como son altamente artificiosas, van en contra de cualquier otro propósito en la política chilena, incluyendo, de manera incidental, el surgimiento de una opción conservadora seria.

La cuestión en Chile no es si puede esperarse que el país retorne a la democracia, sino si una sociedad abierta puede nutrirse de un sistema basado en la fuerza y el temor. *Pinochet* no es el primer dictador que así lo piensa, pero en este sentido Estados Unidos ha tenido suficientes experiencias desafortunadas en el siglo XX, con otros supuestos aliados como para no confiarse. Por lo menos debería reconocer que tras de una fachada de calma, una crisis silenciosa se está urdiendo en Chile, y hay que tomar los pasos que se pueda para impedirlo.

*Policy Review* No. 34